

# Desarrollo regional y reorganización campesina

## La Chontalpa como reflejo del gran problema agropecuario mexicano

DAVID BARKIN\*

### INTRODUCCION

El agro mexicano está en crisis. Sus problemas no son nuevos, pero se agudizan: el ritmo de crecimiento de la producción ha disminuido; las exportaciones agropecuarias han perdido su dinamismo mientras las importaciones crecen; la agricultura de subsistencia está estancada, en tanto que la comercial goza de subsidios, de inversión pública y de recursos para ampliar su alcance y su control sobre el sector. La estructura de la producción sufre un cambio paulatino pero notable hacia productos de exportación y de consumo suntuario; la política oficial lo alienta canalizando créditos a la ganadería y sosteniendo altos precios para estos productos, a la vez que los productores de subsistencia tienen mayores problemas para conseguir los recursos que necesitan para mantener su producción. Como consecuencia, también hay una crisis social en el agro: el ejidatario y el campesino ven que su pequeña economía familiar es desplazada por nuevas formas de organización social, en las cuales carecen de control sobre el cultivo, la tecnología y aun sobre su propia participación en la producción; se transforman en asalariados, dependientes de una nueva burocracia estatal o empresa comercial, o en marginados sostenidos a base de subsidios oficiales o empujados hacia las ciudades perdidas que crecen alrededor de la capital de la república.<sup>1</sup>

El Plan Chontalpa es un buen ejemplo de esta problemática. Concebido en 1963 para resolver problemas, para romper cuellos de botella en el agro, el Plan ha absorbido

\* Este artículo es producto de una investigación emprendida por el Centro de Ecodesarrollo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México) y patrocinado por la Comisión del Río Grijalva y la Secretaría de Recursos Hidráulicos durante 1976-1977. Las afirmaciones con respecto al Plan Chontalpa están fundamentadas en el informe final del Centro. El análisis y las opiniones expresadas aquí son de responsabilidad exclusiva del autor.

1. Para un análisis más extendido de esta problemática, véase Jorge Castell C. y Fernando Rello E., *Las desventuras de un proyecto agrario*, Depto. de Economía, UNAM, México, 1977, 33 páginas. También los varios documentos del Centro de Investigaciones del Desarrollo Rural (CIDER) sobre el problema agrario.

90 000 ha. y 5 000 familias en un ensayo de modernización agropecuaria. Su propósito fue el de servir como modelo en la utilización del gran potencial productivo del trópico húmedo y para la reorganización del sector ejidal. Las nuevas unidades colectivas permitirían el manejo eficiente de grandes extensiones de tierra, sembradas con cultivos comerciales y labradas por los mismos ejidatarios, quienes dirigirían los ejidos colectivos. Hasta 1975 en el Plan se han invertido 1 500 millones de pesos, financiados en partes casi iguales por el Gobierno federal (52%) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (48%). Desde su inicio tropezó con grandes dificultades y no ha logrado sus metas relativas a la producción o a la incorporación de los ejidatarios a la gestión productiva. Los múltiples esfuerzos para reorganizarlo han conformado una estructura productiva eminentemente comercial, orientada hacia mercados extrarregionales, y la economía local padece de los mismos problemas de la nación en su conjunto: 1) creciente incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de la población con la producción local; 2) proletarización del trabajo, y 3) la marginación de numerosos campesinos del proceso productivo.

El Plan es parte de un importante esfuerzo del Gobierno para modernizar el agro mexicano. La organización capitalista de la producción promueve la sustitución de la tecnología tradicional por una nueva tecnología y traduce rápidamente las señales de mercado en decisiones que cambian la estructura productiva, de acuerdo con demandas del mercado nacional e internacional; también alienta la expansión de empresas comerciales y organismos estatales que dirijan la producción en torno a sus propias metas y necesidades, a costa de los productores pequeños. Estos pueden seguir trabajando sus tierras en forma parecida a la del asalariado o enfrentar la posibilidad de ser subempleados o desempleados en otra parte del país. Esta organización capitalista, sin embargo, no abarca todo el sector agropecuario porque una gran parte de sus recursos no son lo suficientemente valiosos como para merecer tal inversión; el desarrollo agrícola deja a los campesinos en las zonas más rezagadas, con los peores recursos, sin oportunidades alentadoras a su vida de subsistencia.

Esta modernización no es producto casual de fuerzas aleatorias; más bien es resultado de un proceso deliberado de expansión capitalista hacia todos los rincones del país. La economía crece e incorpora nuevos recursos y grupos de personas al sector capitalista, sujetándoles a una racionalidad capitalista y despojando a los productores independientes de su capacidad de determinar el uso de sus recursos, aun cuando no puede desplazarlos de sus tierras por ser beneficiarios de la reforma agraria. La expansión capitalista, sin embargo, no es un proceso autóctono; el proceso en cada nación responde en gran medida a las necesidades de la expansión del capital en escala mundial. En México, la influencia del capital extranjero en el sector agropecuario es particularmente notable: hay mayor dinamismo en la producción de exportaciones porque son de mayor interés y rentabilidad al capital extranjero y gozan de más apoyo financiero; de igual manera, la ganadería recibe apoyo por el interés a largo plazo de exportar ganado y por la necesidad de asegurar la oferta de suficiente carne a las capas nacionales acomodadas. Es imprescindible comprender la dinámica del sector agropecuario como parte de un proceso único de expansión del capital a escala internacional y analizar el efecto que éste tiene sobre la estructura de la producción y el bienestar de la mayor parte de la población mexicana.

En este artículo examinamos el sector agropecuario a través del Plan Chontalpa. Su reorganización refleja las tensiones del sector y los problemas de producción, de mercados y de gestión. Los ejidos presentan problemas para la organización del trabajo, dado el papel que desempeña el campesinado en la producción capitalista. Sus problemas son los del sector y las soluciones adoptadas reflejan intentos tempranos del capital extranjero de influir en el desarrollo agropecuario, sin ser dueño de los recursos productivos en la zona.

#### EL DESARROLLO AGROPECUARIO

El Plan Chontalpa, lo mismo que los demás programas elaborados por la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), respondió, en parte, a la perenne necesidad de promover la producción agropecuaria. El ritmo acelerado del crecimiento demográfico y los bajos niveles de alimentación de la mayor parte de los mexicanos, obliga a los gobiernos, desde la época cardenista, cuando menos, a impulsar la producción agropecuaria. Pero el sector primario también sigue teniendo gran importancia en México, por su contribución al crecimiento de la economía y a la acumulación de capital. Desde hace varios decenios, las exportaciones agrícolas han sido determinantes en el financiamiento de las importaciones de bienes de capital e intermedios para la industrialización. Las políticas de precios han logrado una constante transferencia de excedente económico del sector agropecuario hacia el industrial. A pesar de esta cuantiosa contribución del sector primario, la política de industrialización, por medio de la sustitución de importaciones y la promoción de exportaciones, no ha sentado las bases de un crecimiento autosostenido; se siguen agudizando los problemas de desempleo y subocupación, de concentración del ingreso personal y de desequilibrio en la balanza comercial. La inversión privada y pública de origen extranjero resulta, así, necesaria para impulsar el crecimiento y financiar los

déficit en la balanza de pagos. Detrás de este marco, la agricultura retiene su importancia estratégica porque, al fracasar este modelo de industrialización, constituye, junto con el petróleo, la única fuente potencialmente dinámica de divisas y es imprescindible que también logre abastecer las demandas internas de alimentos y materias primas.

En la agricultura el Estado cumple sólo parte de la tarea de promover la producción, pues por lo general ha dependido sobre todo de que los productores privados aprovechen adecuadamente las oportunidades productivas creadas por la intervención oficial.<sup>2</sup> Estos esfuerzos públicos para facilitar el funcionamiento de la empresa privada en el sector agropecuario, generalmente han sido fructíferos. En efecto, desde los inicios de la Comisión Nacional de Irrigación (1927), una gran parte de la inversión total en el campo se destinó a la construcción de grandes obras de riego; han sido los agricultores privados —neolatifundistas— los que, por razones bien conocidas y a través de mecanismos muy estudiados, han aprovechado este nuevo potencial productivo.<sup>3</sup> Ellos han logrado que los nuevos distritos de riego sean en gran medida productivos y han contribuido en forma decisiva a la expansión agropecuaria. Una parte importante de esta inversión capitalista proviene de fuentes extranjeras, tanto de empresas agroindustriales transnacionales cuanto de créditos públicos canalizados a través de la banca mexicana, hacia aquellos renglones que las instituciones financiadoras estiman más convenientes.

El resultado ha sido bastante positivo: de 1935 a 1970 se logró aumentar el volumen de la producción agropecuaria a un ritmo anual de 5.2%, ligeramente superior al del crecimiento demográfico. Esto permitió que México siguiera siendo un país exportador de productos agrícolas y que la agricultura proveyera de materias primas a algunas de las industrias de transformación, como la textil y la alimentaria. Con las políticas actuales, que otorgan fuertes subsidios para la producción, la compra de bienes de capital (tractores, camiones y otros equipos pesados) y de insumos modernos (fertilizantes, semillas mejoradas, herbicidas y energía), no es de sorprender que los empresarios agrícolas tengan un índice de empleo por hectárea sustancialmente inferior al de los demás sectores de la agricultura mexicana.<sup>4</sup>

Esto es natural, ya que en aquellas zonas donde existe completa libertad para organizar sus empresas, los capitalistas han logrado un alto grado de rentabilidad en el manejo del agro. Desde el punto de vista de la ganancia, tanto los subsidios para la compra de maquinaria cuanto los problemas de organización y de disciplina laboral, crean fuertes incentivos para el desplazamiento de la mano de obra en las

2. Para una discusión más amplia del papel del Estado en el desarrollo en México, véase David Barkin, "Los beneficiarios del desarrollo regional", en ILPES, *Ensayos sobre planificación regional del desarrollo*, Siglo XXI Editores, México, 1976.

3. El neolatifundio es una categoría que se refiere a la concentración de un potencial productivo en el agro, generalmente asociado con la aglomeración de grandes superficies de tierra de manera "extralegal" y siempre incluyendo fuertes inversiones que permiten la utilización de tecnologías modernas y el empleo de asalariados.

4. Desgraciadamente, hasta el momento no se ha estimado el monto de estos subsidios ni existe un análisis de su efecto sobre el papel del capital extranjero en la reestructuración del agro mexicano.

labores agrícolas a gran escala, sobre todo en el noroeste, donde la tecnología moderna se adapta mejor a la organización capitalista del trabajo agrícola.

La consecuencia ha sido significativa: después de muchos años, durante los cuales se notó un gran dinamismo en la producción de granos para el consumo popular, la política agrícola cambió bruscamente, alentando los productos suntuarios y de exportación. Como resultado, a partir de 1963 se registra un alto ritmo de crecimiento de la producción de algunos productos de exportación, de productos industriales y de productos para las clases pudientes en México. Esto es resultado de las políticas agrícola y de precios: mientras que se mantenían bajos los precios para productos primarios y subían los de los productos destinados a los grupos más acomodados y a la exportación, los productores comerciales respondían con cambios en la estructura de su producción. Desde el punto de vista de estos empresarios, el negocio seguía bien, pues las políticas de impulso a la producción y de precios les permitían aumentar sus ganancias, facilitando la reinversión y el crecimiento de sus empresas; los encargados de la política, por su parte, estaban satisfechos con el crecimiento de la producción y con la exportación que generaba las divisas requeridas por el crecimiento industrial.

Pero el crecimiento del sector neolatifundista no se ha extendido a toda la agricultura mexicana. La gran mayoría de los agricultores, tanto minifundistas como beneficiarios de la reforma agraria, sigue cultivando la tierra con técnicas tradicionales y no dispone de insumos mejorados y tecnología moderna. Estos productores no tienen la posibilidad de emprender cultivos costosos, como son los de exportación, por falta de acceso al crédito y a los conocimientos especializados y por el control monopolístico de los canales de comercialización. Se concentran básicamente en la producción de granos para el consumo familiar y para el intercambio en pequeña escala que les permita satisfacer sus demás necesidades elementales. Así, se puede entender el crecimiento del sector agropecuario como un proceso integral en que se alienta la producción comercial, por un lado, mientras que por otro se mantiene en el estancamiento al sector minifundista y ejidal. Esta misma política ha creado un grupo próspero y otro, más numeroso y creciente, de marginados, empobrecidos por la propia expansión del capitalismo en el sector primario.

Por esta misma razón la oferta de alimentos básicos ha perdido su dinamismo a la vez que sigue aumentando la demanda de granos. Sin precios adecuados, los grandes agricultores prefieren la producción de otros cultivos de mayor rentabilidad. Aun cuando el Gobierno elevó de manera notable los precios de garantía para algunos productos básicos en 1973 y se observó un fuerte aumento en la superficie sembrada con estos cultivos (maíz, frijol, trigo, cártamo, soya y ajonjolí) en los distritos de riego, los cambios fueron temporales. Al recuperarse los precios relativos de los productos de exportación, los productores comerciales cambiaron una vez más la estructura de su producción. De esta manera se agudizaron las diferencias dentro del campo y aumentó la transferencia de recursos de la fracción más empobrecida del campo hacia los capitalistas industriales, por medio del sistema de precios. Los capitalistas industriales fueron beneficiados por la política de estabiliza-

ción de precios urbanos para los productos básicos por su efecto en restringir los aumentos en los salarios de sus obreros. El resultado de este sistema fue la disminución previsible, por los sectores afectados, de la oferta comercial de productos primarios y el aumento de las importaciones de éstos para satisfacer las demandas más apremiantes de la población.

Ante este panorama, no debe extrañar que la política económica buscara otros caminos para enfrentarse a los obstáculos estructurales que impedían la expansión del sector agropecuario. El capitalismo neolatifundista no puede incorporarse al ejido por razones legales y políticas y la absorción del minifundio es un proceso paulatino y prolongado. El arrendamiento ilegal de terrenos ejidales o la transferencia de los derechos de usufructo no son soluciones permanentes para impulsar el crecimiento de este sector, que actualmente ocupa más de 50% de la superficie total y de labor del país; las limitaciones económicas son grandes, ya que en muchos casos los arrendatarios no tienen garantías para realizar las inversiones fijas necesarias para mejorar la productividad de la tierra. Aun cuando los productores privados no han sido demasiado restringidos por la prohibición formal de la compra o del arrendamiento de terrenos ejidales o por la falta de inversiones fijas, las limitaciones institucionales en estas formas de ocupación de la tierra constituyen, en sí, un obstáculo casi insuperable para la expansión del neolatifundismo fuera de las mejores zonas productivas.<sup>5</sup> El sector ganadero también se sintió frenado en sus posibilidades de expansión, ante la probabilidad de que, una vez hechas las nuevas inversiones en una ganadería más productiva, se expropiaran en beneficio de algunos de los grupos mayoritarios del campo que carecen de recursos propios.

Así, para los políticos, las posibilidades de seguir avanzando en el campo dependían, en gran medida, del aprovechamiento de zonas aisladas o subaprovechadas o de la reorganización de los sectores minifundistas y ejidales para aumentar su productividad por medio de la unificación de parcelas y la introducción de tecnología moderna a gran escala, es decir, de su integración cabal al sistema capitalista. Además, la falta de una infraestructura adecuada de caminos, de sistemas de riego y desagüe, de canales de distribución y comercialización eficaces, aparecía como un obstáculo a la expansión del aparato productivo capitalista en el campo.

#### *Las contradicciones internas*

Los problemas más visibles del desarrollo agropecuario mexicano no están aislados. Son producto de tendencias evidentes en la economía nacional y consecuencia de la influencia que ejerce el capitalismo internacional en el país. El creciente interés de las empresas agroindustriales, originarias de los países industriales, es producto del gran mercado mexicano

5. El grado de arrendamiento y concentración de la tierra en los distritos de riego se ejemplifica al señalar que en 1973 5% de los propietarios explotaba 37% de la superficie total, mientras que 86% de los usuarios disponían de 43%. El arrendamiento, por su parte, abarcaba en ocasiones a la mayoría de las tierras de riego del sector ejidal en varios distritos del norte y noroeste. Iván Restrepo, en "La transferencia de recursos a la agricultura", en *El Economista Mexicano*, vol. XI, núm. 3, México, 1976.

para sus productos y de la abundancia de recursos naturales y mano de obra disponible que posibilita la exportación ventajosa de productos primarios o semielaborados. Más importante aún es que esta influencia extranjera es reflejo e instrumento de la penetración capitalista: la movilización de recursos materiales y humanos y su transformación para servir a las necesidades de acumulación de capital a escala mundial. Sin entrar en gran detalle se presentan en este apartado ciertos procesos comunes de la expansión del capitalismo que condicionan la transformación de la economía nacional y la reestructuración del sector agropecuario.<sup>6</sup>

A medida que el crecimiento económico continúa, se ha registrado en México una acelerada concentración del ingreso personal.<sup>7</sup> Hay diversos estudios y explicaciones de este fenómeno que se apoyan en la incapacidad del sistema impositivo para redistribuir el ingreso y en la falta de oportunidades de empleo para los grupos más necesitados. En el fondo, sin embargo, parece claro que es resultado de la centralización, en manos de unas cuantas personas, del control sobre los medios de producción en todos los sectores económicos, debido al mismo proceso competitivo que cuenta con el apoyo de la política estatal.<sup>8</sup> En el agro, por ejemplo, un décimo de las empresas agrícolas (los neolatifundistas) aportaron 70% de la producción agropecuaria en 1970, mientras los minifundistas, en términos reales, cosecharon menos en 1970 que en 1960, a pesar del aumento continuo en sus números.<sup>9</sup> De la misma manera, en 1965 menos de 1 000 empresas industriales (1% del total) vendieron las dos terceras partes de la producción manufacturera, y seis grupos bancarios controlaron tres cuartas partes de los recursos del sistema.<sup>10</sup> Evidentemente la centralización del capital ha seguido alentada de muchas maneras, en el decenio transcurrido desde que se hicieron estos estudios, dada la política de estímulos para la inversión privada, la política de precios y aun la de austeridad recién impuesta por insistencia del Fondo Monetario Internacional.

Los mismos factores que producen una pronunciada desigualdad en la distribución del ingreso personal llevan a un desarrollo desigual que también se manifiesta en la distribu-

ción espacial de las actividades.<sup>11</sup> Una gran parte de la actividad industrial se concentra en el Valle de México y otras tres o cuatro ciudades, mientras el grueso del crecimiento en la producción agropecuaria se concentra principalmente en los distritos de riego del noroeste del país. Estas zonas de crecimiento económico son también gran atractivo migratorio y como consecuencia se concentra en ellas una parte importante de las personas marginadas por el proceso de expansión del capitalismo que fueron expulsadas de las demás zonas.

Con la modernización de la agricultura en los distritos de riego y con la política económica de fomento a la agricultura comercial, ha habido un creciente desplazamiento de los pequeños agricultores y ejidatarios. Sus terrenos no alcanzan para sostener varias generaciones, a medida que crece la familia; incluso se han vuelto insuficientes para una sola, dadas las desfavorables condiciones de intercambio que prevalecen. Muchos campesinos se ven obligados a buscar trabajo como asalariados en el campo o en las ciudades. Expulsados del campo, se enfrentan a dificultades para encontrar trabajo en las ciudades.

La modernización del campo, a la vez, trae una transformación en la estructura productiva del sector agropecuario. Las distintas regiones del país se están especializando en diferentes productos agropecuarios y en gran parte su producción se orienta hacia la exportación, donde la ganancia es mayor. Así, las frutas y las hortalizas han tenido auge en el Bajío y en el norte del país; las grandes superficies para pastoreo extensivo se expanden para aumentar la cría de becerros, para la exportación en pie a Estados Unidos, mientras que las nuevas zonas productivas del sureste se abren a la explotación ganadera para el mercado interno. El proceso de especialización regional y los incentivos a la exportación son un resultado "natural" de la penetración del capitalismo y de una situación en la que las decisiones productivas obedecen a las "señales del mercado". La ausencia de un plan nacional restringe la injerencia del Estado en la programación de la producción agropecuaria y en la fijación de precios de garantía y de políticas crediticias; éstas son relativamente eficaces frente a las señales de precios que provienen de los mercados internacionales y los abundantes recursos financieros de empresas transnacionales. Como consecuencia, el país experimenta crisis periódicas de abastecimiento de alimentos, resultado del uso de gran parte de sus mejores tierras para producir para la exportación. Esta estrategia ocasiona grandes riesgos en términos de fluctuaciones de demanda y precios. El mercado interno resulta un último recurso para el productor capitalista, una garantía cuando las mejores posibilidades de venta y ganancia en el extranjero se desvanecen.

Para que la agricultura capitalista funcione, requiere de una amplia y ágil oferta de créditos y de insumos que están controlados por intereses extranjeros. Una gran parte de estos recursos para la producción es del sector privado, en el cual la empresa transnacional tiene una influencia predominante. Aun cuando no son de participación mayoritaria en la producción, estas empresas disponen de financiamiento y de tecnología, conocen las ventajas de distintos sistemas produc-

6. Para una discusión más extendida de este proceso, se recomienda la literatura sobre la internacionalización del capital en general y la referente especialmente a las agroindustrias. Véase, por ejemplo, los artículos de Christian Palloix y Alain de Janvry y Carlos Garramón, en *Review of Radical Political Economics*, vol. IX, núm. 2, Nueva York, verano de 1977; también un escrito de Gonzalo Arroyo, de la Université de Paris (X-Nanterre), "Capitalisme transnational et agriculture traditionnelle: Formes de intégration", que es parte de un proyecto amplio sobre el tema. El trabajo de Ernest Feder, "Agribusiness and the elimination of Latin America's rural proletariat", en *World Development*, vol. V, núm. 5, 1977, también es de gran interés.

7. Cf. Banco de México, S.A., *La distribución del ingreso en México*, Fondo de Cultura Económica, México, 1973.

8. El análisis marxista hace evidente el carácter superficial de conclusiones relacionadas a la distribución personal del ingreso y la necesidad de examinar el control de los medios de producción —y del proletariado— para entender la dinámica a que se hace referencia en el texto. Véase Karl Marx, "Introducción a la crítica de la economía política", en *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política*, Siglo XXI Editores, México, 1974, vol. 1.

9. Datos del CIDER con base en los censos y citados en Castell y Rello, *op. cit.*,

10. David Barkin, "Mexico's albatross: The United States Economy", en *Latin American Perspectives*, vol. II, núm. 11, verano de 1975, pp. 64-80.

11. José Luis Corragio, "Consideraciones teórico-metodológicas sobre las formas sociales de organización del espacio y sus tendencias en América Latina", en *Revista Interamericana de Planificación*, vol. VIII, núm. 32, diciembre de 1974.

tivos y tienen acceso privilegiado a las empresas productoras de insumos y maquinaria. También controlan los canales de comercialización, lo cual las coloca en una relativa posición ventajosa respecto a las nacionales. El sector público tiene limitadas posibilidades de responder a las demandas para promover el desarrollo; sus recursos siempre son escasos y tradicionalmente el sector agropecuario ha llevado la peor parte en la competencia con otros intereses nacionales para estos fondos, aunque en años recientes la prolongada crisis agrícola facilitó la asignación de mayores recursos a la agricultura. Como ocurre en muchos otros países, la falta de fondos de inversión en México permite al Banco Mundial y al BID tener una influencia desmesurada en la elaboración de las políticas específicas de promoción agropecuaria para las líneas de crédito que ambos ofrecen para respaldar y complementar esfuerzos "nacionales", en programas específicos que son de su interés. Ofrecen el financiamiento adicional para encauzar recursos nacionales hacia productos que estos bancos, junto con organismos como la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), de Washington, consideren conveniente, tales como los programas para productos de exportación y sobre todo para la ganadería. Así, la disponibilidad de los insumos fundamentales para la producción misma del país está controlada por grupos extranjeros, cuyos objetivos no siempre concuerdan con los mexicanos.

Esta dependencia se acentúa a medida que se sigue modernizando la producción. La tecnología necesaria para usar los nuevos insumos, cultivar grandes extensiones y aumentar o mantener la productividad, requiere de fuertes inversiones. La producción y el mercado para estos bienes están controlados por empresas transnacionales aun cuando hay una fuerte participación estatal; las transnacionales forman parte de los grupos que comercializan la producción o colaboran con ellos. Se ha creado una estructura monopolística, a escala internacional, que requiere de la participación de muchos trabajadores en México para la producción de bienes destinados a los mercados externos; los obreros están sujetos a un complejo sistema de control, disciplinados ante la amenaza del desempleo, por la organización del trabajo y por la sistemática explotación que les impide usar los conocimientos y la experiencia acumulados a través de años en la agricultura tradicional.

El resultado de este proceso es evidente. El país se enfrenta a una aguda crisis de abastecimiento a medida que su estructura productiva cambia. Los que fijan la política se encuentran en una contradicción generada por los conflictos de intereses entre los que quieren estimular la producción nacional de artículos básicos y los que pugnan por la especialización y la más plena inserción de la economía mexicana en la internacional. Los obreros y campesinos se dan cuenta de la existencia de un proceso que los manipula, quitándoles el poder de decisión y aun el control sobre la parcela a que tienen derecho. El sector agropecuario forma parte, pues, de una contradicción profunda: la economía se moderniza, integrando trabajadores y recursos mexicanos a un aparato productivo destinado a satisfacer demandas de mercados ajenos y a canalizar el control y los beneficios a unos pocos capitalistas extranjeros. La economía mexicana tiene una mayor capacidad productiva pero menores posibilidades de movilizar sus recursos y su fuerza de trabajo para satisfacer sus propias necesidades.

### *La promoción estatal*

Estas tendencias y contradicciones son bien conocidas en el país. El Gobierno se muestra preocupado por la concentración del ingreso y de la actividad económica, por el creciente papel de la empresa transnacional en la economía y por la proletarianización de la agricultura; pero orienta sus acciones a resolver otros problemas —estimular el crecimiento sectorial y las exportaciones— y en el proceso muchas veces contribuye a agudizar los demás. Esto no debe sorprender, ya que la dinámica de la economía capitalista produce estos resultados; el Gobierno tiene bastante que hacer respondiendo a los obstáculos a que se enfrenta el crecimiento agropecuario como para cambiar la estrategia misma.

Se han escogido dos líneas principales para impulsar la producción: intensificar los programas de desarrollo regional y reorganizar las unidades productivas en el campo. La selección de estas líneas pone de manifiesto las limitaciones de otro tipo de estrategias que dependen del incremento del volumen de nuevos recursos materiales y humanos, como han sido los intentos de colonización, la exploración de áreas nuevas y la importación de recursos productivos. En cambio, las soluciones escogidas hacen hincapié en el mejor aprovechamiento de los recursos, existentes y conocidos, aumentando la productividad mediante programas de intervención oficial.

### *Desarrollo regional*

El desarrollo regional es una estrategia que intenta aumentar la infraestructura física e institucional, mediante la aportación de los recursos financieros y humanos necesarios para facilitar la producción rentable, en escala comercial. En general, como se mencionó antes, los programas de desarrollo regional no pretenden comprometer al Estado mismo en el proceso productivo; más bien, crean las condiciones idóneas para que los productores —ejidatarios, neolatifundistas y minifundistas— puedan aumentar los rendimientos físicos y sus propios ingresos.

Existen muchas razones para haber puesto tanto esfuerzo en la programación regional en México; como estrategia tiene una historia de más de 30 años, pero se le ha prestado mayor importancia en los más recientes. Quizá uno de los más significativos es la fuerte concentración de la actividad económica en el centro del país, con la consiguiente migración que provoca un despoblamiento de zonas de gran potencial agropecuario subaprovechado. Se ha promovido la creación de parques industriales y ampliado el concepto de las zonas fronterizas donde se pueden producir bienes libres de impuestos para la exportación. En las zonas rurales se han intensificado las labores de promoción para la pequeña irrigación mientras que se han seguido realizando grandes inversiones públicas para la agricultura; en los distritos de riego resultan importantes las nuevas áreas de desarrollo agropecuario, por su aporte a la transformación de la estructura productiva. Es ahí donde se puede crear la especialización necesaria para fomentar la expansión del capital privado en el sector y promover las exportaciones.

El método que se utiliza para aprovechar los recursos desconocidos o subaprovechados es el de crear polos de crecimiento. El Estado invierte grandes cantidades de dinero

en la infraestructura y en los preparativos necesarios para el comienzo de las actividades productivas organizadas por el capital privado o estatal. La nueva infraestructura facilita la extensión de una nueva organización de la producción a regiones aisladas, donde los grandes capitales cambian la forma de trabajo y convierten a los habitantes en asalariados. Este proceso no solamente modifica su condición laboral; cambia también su estilo de vida, insertándoles directamente en los canales de comercialización nacional mediante el debilitamiento de su capacidad para mantenerse autosuficientes. Su dieta, su vivienda y aun sus relaciones sociales tienen que adaptarse a las nuevas condiciones, conformadas por los esfuerzos oficiales para modernizar la estructura productiva e integrar plenamente a los campesinos y artesanos a la economía y política nacionales.

#### *Reorganización campesina*

Actualmente se considera la inflexibilidad de la organización ejidal como uno de los más grandes obstáculos a la modernización del sector agropecuario mexicano. Más de la mitad de la tierra laborable del país está bajo la tenencia ejidal y no se le puede expropiar; una gran proporción de esta tierra está subdividida en pequeñas parcelas familiares, trabajadas con métodos tradicionales, donde se obtienen bajos rendimientos. Los contados casos de cultivo a escala comercial, como algodón, trigo y cártamo, sugieren que hay muchas otras oportunidades. Para el Estado, una de éstas es el reordenamiento de la tierra ejidal, para poder someterla a las nuevas modalidades de exportación, que permiten tanto la agrupación de las parcelas para su explotación en gran escala cuanto la introducción de nuevos procesos de trabajo que faciliten la transferencia de parte del excedente generado por la modernización hacia los otros sectores donde se concentran las grandes capitales.<sup>12</sup>

Dentro de este marco, el ejido colectivo ha adquirido gran importancia, por ser una manera factible y atractiva de lograr la reorganización del sector ejidal. Se le concibe como una agrupación de ejidatarios en una sola organización, responsable del manejo de la tierra, para facilitar el aumento de la producción en el campo. Generalmente se supone que, como parte del modelo de transformación institucional, la creación del ejido colectivo debe contar no sólo con un pleno apoyo político, sino también con el compromiso de quienes se asocian para trabajar, lo que permite desarrollar una participación real del grupo en la toma de decisiones.<sup>13</sup> Pero este sistema trae consigo una posible contradicción: a la vez que se abre teóricamente la oportunidad de una mayor participación campesina en la gestión de una empresa productiva, en la práctica la introducción de un nuevo proceso productivo, en el cual los ejidatarios no tienen injerencia ni siquiera en las decisiones sobre el uso de su propia tierra, cierra dicha posibilidad. En efecto, la organización del trabajo de los

nuevos ejidos está, en la mayoría de los casos, supeditada a la estructura productiva y la tecnología y las decisiones al respecto quedan fuera del control de los campesinos; asimismo, en el proceso de racionalizar la producción, la organización colectiva generalmente ocupa menos mano de obra y expulsa algunos obreros hacia otras zonas.

Sin embargo, la necesidad de reorganizar el sector agropecuario es tan apremiante que la organización colectiva tendrá que seguir siendo un instrumento de la política agraria, a pesar de la plena comprensión de esta contradicción entre los que toman las decisiones. Sería interesante examinar cómo se instrumenta esta forma de organización para tratar de atenuar algunos problemas o efectos nocivos.

#### EL PLAN CHONTALPA

Tanto la contradicción como las tendencias del desarrollo nacional se hacen evidentes en el Plan Chontalpa. Originalmente concebido como un programa de desarrollo regional (el Plan Limón, como primero se le conoció) tenía como propósito aprovechar un gran potencial económico para crear una agricultura diversificada, que daría pleno empleo a las 5 000 familias que viven en la zona. Por insistencia del BID se elaboró un proyecto congruente con las necesidades del momento: un programa de reforma agraria integral. La expropiación masiva de la tierra llevaría a una distribución equitativa, con obras de integración social que facilitarían el reacomodo de la población y su integración a la vida política de la región y del país.

El Plan contemplaba cambios ecológicos, económicos y sociales radicales. Los desmontes alcanzaron 40 000 ha., destruyendo el hábitat natural del cual se alimentaba la población. Con la construcción de la presa Raudales de Malpaso y la carretera del Golfo que unía el centro de la república con el sureste, se sentaron las bases para un aumento en la salinidad de las lagunas costeras y del manto freático, poniendo en peligro la producción de ostiones en un corto plazo y limitando la posibilidad de usar los nuevos pozos que se estaban construyendo para el riego. Pero estos cambios (algunos imprevistos) debían compensarse, según el pensamiento de los planificadores, con un aumento importante en el valor de la producción agropecuaria. Existía un detallado programa de reestructuración de la producción, que contemplaba arroz, maíz, cacao y hule hevea como productos principales, así como una gran variedad de otros artículos. Una pequeña parte de la zona tendría pastizales para mantener la ganadería extensiva que abastecería las necesidades locales.

La distribución espacial de la población se vio afectada por la construcción de 22 poblados nuevos, en los que actualmente viven casi 40 000 personas. Este reacomodo de la población permitiría que la Comisión del Río Grijalva proveyera un cierto mínimo de servicios públicos y sociales, como electricidad, agua, alcantarillado, escuelas, clínicas y administración pública. La organización familiar de la vida social y el trabajo también se vio transformada por la creación de sociedades ejidales que actualmente trabajan la tierra colectivamente. También se propuso la capacitación de los campesinos para que pudieran participar en la gestión productiva y en la dirección del Plan.

12. Evidentemente, existen varias opciones para la reorganización del campo. La que se analiza aquí fue puesta en marcha por el régimen pasado en 800 ejidos. Para un examen de esta experiencia desde un punto de vista operacional véase Salomón Eckstein, *Group farming in Mexico and Peru: A multivariate analysis of peasant cooperatives*, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel, diciembre de 1976.

13. Iván Restrepo y Salomón Eckstein, *La agricultura colectiva en México*, Siglo XXI Editores, México, 1976, p. 315.

Tanto en los aspectos económicos como en los sociopolíticos, los planes originales han sufrido fuertes modificaciones. La concepción inicial de una zona de agricultura diversificada se alteró por la falta de apoyo oficial. Esto se manifestó en el retardo de la definición de la organización campesina y la falta de crédito. En su lugar, se optó por implantar la producción ganadera, que ocuparía más de la mitad de la superficie, complementándola con caña de azúcar que vendría a cubrir otra cuarta parte. Los créditos para conformar este giro llegaron rápidamente, una vez que se había ganado el respaldo de los grupos de decisión a nivel nacional, quienes habían visto con cierta alarma la posibilidad de que una inversión de más de 1 000 millones de pesos fuera a beneficiar a una sola región en la cual tenían poca injerencia.

Tampoco se realizaron los propósitos iniciales de que hubiera una activa participación campesina en el manejo del Plan. Por un lado, la tecnología escogida no les era accesible, pues no sólo representaba un cambio brusco en términos de introducción de maquinaria y de insumos químicos, sino que también suponía el rechazo de sus conocimientos del clima y de manejo del ambiente. Los resultados técnicos y económicos no fueron buenos y los campesinos terminaron rechazando las posibilidades de aprender la nueva tecnología y utilizando sus conocimientos tradicionales en las parcelas familiares que se les entregaron. El Plan impedía la activa participación campesina dadas las exigencias institucionales de mantener control sobre sus respectivas áreas de autoridad; fue así que los técnicos y banqueros determinaron la estructura de la producción, el calendario de labores y la forma de realizar los trabajos del campo, a los cuales tenían que sujetarse los ejidatarios.

Los campesinos respondieron a esta situación con su único instrumento de resistencia: la negativa a cumplir con las demandas de trabajo. A pesar de la existencia de un instrumento legal que exige un mínimo de 140 días al año de trabajo en los ejidos colectivos, es muy frecuente que no pasen de 90 o 110. Así responden los ejidatarios a los bajos ingresos que reciben en muchas de las labores del campo. También encuentran fácilmente sustitutos que cubran sus deberes en el trabajo colectivo y en el trabajo de las parcelas familiares. Algunos, sin embargo, tienen acceso privilegiado a puestos de mayor ingreso y poder en los ejidos y organismos oficiales. Esto, junto con sus propios recursos, crea una nueva estructura de estratificación social que reproduce, dentro del Plan Chontalpa, el mismo patrón de creciente diferenciación social que se da en la nación: mientras que una pequeña minoría goza de ingresos relativamente altos, provenientes de sus "rentas" como socios ejidales y, en ocasiones, de sus trabajos especiales, la mayor parte son jornaleros, asalariados pagados por los ejidos o los bancos.

El Plan no ha logrado todavía hacer efectivo su potencial económico. Con la transformación de su estructura productiva, en 1970 se empezó a construir un ingenio azucarero y a preparar el terreno para la ganadería. Los rendimientos físicos de la caña en el campo y del azúcar en la fábrica son bastantes bajos y obligan a subsidiar a los ejidatarios y al ingenio. Todavía es muy temprano para obtener ganancias de la ganadería, debido a las fuertes inversiones requeridas en los primeros años. Se espera que los problemas técnicos de

esta actividad se resolverán en un futuro cercano. Con la expansión de la producción ganadera y el mejoramiento de las plantaciones de cacao, además de los planes para la agroindustria, los nuevos dirigentes del Plan tienen grandes esperanzas de que la zona será rentable en 1977.

Desde afuera, sin embargo, el Plan no presenta un panorama alentador. Los cambios sociales han colocado a la población en una posición confusa pues al mismo tiempo son socios en una empresa colectiva y jornaleros que dependen de la banca oficial; se les exige que participen en sus sociedades colectivas y se les niega la posibilidad de una injerencia efectiva; fueron arrancados de una sociedad tradicional e insertados en la sociedad nacional en su eslabón más bajo. Económicamente, el Plan todavía no ha justificado la fuerte inversión pública ni ha generado las divisas necesarias para amortizar la deuda contraída para financiarlo. El costo por empleo creado es muy superior aun al que en los años sesenta presentaba la industria mexicana. En cuanto al ambiente, el Plan destruyó una gran selva sin reemplazarla con una estructura equilibrada y todavía no pueden identificarse todos los daños. En el plano político, sin embargo, el Gobierno sigue apoyando no solamente el concepto del ejido colectivo sino también el mismo Plan Chontalpa. Al comprender por qué, se entenderá un poco mejor la dinámica de la economía agropecuaria mexicana.

#### *La dinámica agropecuaria*

No obstante la poca importancia relativa del Plan Chontalpa en el sector agropecuario mexicano, el esquema original y las modificaciones que ha sufrido son bastante reveladoras de algunas tendencias importantes. Contribuyen a explicar la nueva estructura de la producción nacional; facilitan la comprensión de los efectos de los cambios tecnológicos y la organización del trabajo; finalmente, permiten un estudio más a fondo de la participación del capital extranjero en la conformación de la política económica nacional y en la producción.

No es por mero accidente que el Plan, a diferencia de los otros proyectos de desarrollo regional, fuera financiado con recursos internacionales. A fin de cuentas, este financiamiento y el apoyo del BID lo han sostenido, pese a la oposición inicial del Poder Ejecutivo Federal. En un primer momento, el Plan Limón fue concebido como un intento de "reforma agraria integral" que pudiese servir como respuesta a las políticas de transformación estructural emprendidas por la recién nacida Revolución cubana, pues el BID fue creado para buscar opciones políticas que ofrecieran caminos al cambio social. El atractivo del Plan era, en aquel momento, la elaboración de un programa de reforma agraria integral que habría de beneficiar a un grupo rural, colaborando con el desarrollo del capitalismo privado a nivel regional. Fue precisamente este carácter local lo que creó la oposición entre las fuerzas políticas mexicanas y restringió los fondos para financiar la producción. El apoyo financiero solamente se recuperó cuando empezó a responder a ciertas necesidades de orden nacional y a tener congruencia con el patrón de expansión capitalista, promoviendo la exportación de productos agropecuarios y modernizando la agricultura tradicional para que generara nuevos excedentes económicos, transferibles a otros grupos.

El cambio hacia el desarrollo de la ganadería es un buen ejemplo de la injerencia de la economía internacional en la zona. Con la ventaja de un análisis más global del sector agropecuario, se puede afirmar que es parte de una estrategia internacional deliberada para aumentar la capacidad productiva de la ganadería mexicana y abastecer el mercado norteamericano con novillos para la engorda, producidos en el norte de México. Esto abarataría los costos de producción en aquel país y permitiría un uso más productivo de los excedentes de granos que se producen allí.<sup>14</sup> A nivel nacional los mejores terrenos se hallan reservados a la producción especializada para la exportación, y la ganadería es un rubro de gran importancia, aunque también lo son los otros cultivos importantes de los distritos de riego. Con el uso de grandes extensiones en el norte de México para la cría de novillos de exportación, era imprescindible encontrar otras tierras que satisficieran el crecimiento de la demanda interna de ganado. El sureste o trópico húmedo fue seleccionado y la decisión fue financiada con créditos internacionales de la AID, el BID y el Banco Mundial y apoyada por el Banco de México por medio de su respaldo a la banca privada. Esta tendencia no significa un aumento sustancial en la oferta de carne para el mercado nacional; más bien representa la desviación de cierto potencial productivo hacia la satisfacción de las demandas de los mercados internacionales.

Esto se explica por la necesidad impostergable de encontrar nuevas fuentes de divisas, dada la severa crisis en el sector externo. La política de sustitución de importaciones no logró reducir el déficit estructural y la política de promoción de exportaciones pudo aumentarlas sólo a un costo muy alto en subsidios. Con las políticas expansionistas de la década de los setenta la crisis se agravó y ni siquiera la devaluación de 1976 logró corregir el problema fundamental de una oferta inadecuada para la exportación. La incapacidad del sector industrial para responder a este problema, así como las limitaciones del turismo como fuente de divisas, han dejado al petróleo y al sector agropecuario como únicas fuentes importantes de las mismas. Así, la especialización regional que promueve la producción agropecuaria para las exportaciones constituye una parte importante de la política económica nacional.

Esta preocupación se manifestó claramente en La Chontalpa, con el cambio estructural de 1970. El viraje hacia la producción de caña de azúcar respondió a las esperanzas que tenía el país para cubrir parte de las cuotas de exportación transferidas de Cuba a otros países productores del dulce. En cuanto a la ganadería, orientada sobre todo al mercado interno, era necesario impulsarla porque las otras regiones estaban dedicándose a la exportación. Los mecanismos para realizar esta transformación fueron casi exclusivamente financieros: de repente había el crédito refaccionario para la ganadería y los directivos del Plan lo aceptaron.<sup>15</sup> El control

de las fuentes de financiamiento agropecuario, así como la influencia de la banca internacional y el capital extranjero, en la conformación de una estructura productiva mejor adaptada a las necesidades del sistema capitalista internacional, son de gran importancia.

La reestructuración productiva no pudo haberse dado, sin embargo, sin cambios radicales en la organización de la producción en la zona. Era necesario ejercer un control centralizado de los ejidos colectivos por parte de las instituciones gubernamentales, para garantizar así la instrumentación del nuevo programa en todas sus facetas. También era imprescindible la implantación de un nuevo proceso de trabajo que permitiera el cultivo de productos destinados a mercados en otras regiones o países. Aunque la historia de las transformaciones institucionales resulte interesante en sí, por ahora parece suficiente presentar su resultado: la formación de ejidos colectivos controlados completamente por instituciones oficiales.

El ejido colectivo permite superar las actuales limitaciones de la modernización del campo mexicano. El reparto masivo de la tierra en pequeñas superficies no permite una coordinación de los productores individuales; su reunificación sólo es posible en el marco del ejido colectivo, o de alguna otra forma parecida, ya que la transformación del ejido en propiedad privada no es políticamente posible. Pero con una organización colectiva no sólo es factible unificar parcelas individuales para la producción en gran escala, sino también modificar el proceso del trabajo para asegurar el cumplimiento de las labores del campo, aun cuando los mismos ejidatarios no estén dispuestos o no sean capaces de ofrecer toda la fuerza de trabajo requerida en los campos. De hecho, el ejido colectivo es un instrumento muy útil para alentar la expansión capitalista en el campo mexicano: permite reorganizar el proceso de trabajo utilizando la nueva tecnología en nuevas unidades productoras, más idóneas para la producción capitalista, convirtiendo a los ejidatarios en asalariados rurales y facilitando la contratación de jornaleros eventuales para suplir la oferta estable cuando se presenta la necesidad. El ejido colectivo es un buen marco institucional para imponer cierto control sobre la producción agropecuaria, sujetándola a una racionalidad capitalista ligada directamente a procesos internacionales.

Es interesante anotar, un poco al margen, la semejanza de este proceso con algunas de las transformaciones que se dieron durante la revolución industrial inglesa durante el siglo XVIII. Se afirma, por ejemplo, que una parte importante del contenido de las modificaciones tecnológicas en aquel entonces tenían que ver no tanto con un mejoramiento en la producción laboral en el trabajo, sino más bien con su aportación a la reorganización del trabajo. Es decir, la nueva tecnología permitía la concentración de los artesanos en un solo techo, bajo el control del capitalista quien pudo asegurar que los obreros dedicaran todo el día a las labores

14. No es, quizás, una mera coincidencia que la Compañía Nestlé haya realizado inversiones en siete granjas lecheras en el Plan, como parte de esta reestructuración. Para un análisis detallado de la Nestlé en La Chontalpa véase Luis Fernández Ortiz y María Tanio de F., "Modernización de la agricultura campesina ejidal y dependencia económica", en *Naxi-nantá*, Fondo de Cultura Campesina, núm. 2, México, abril de 1977.

15. La importancia de la ganadería tropical para el mercado interno y del financiamiento internacional fue confirmada en un

seminario patrocinado por el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA) del Banco de México en 1976. Véase Secretaría de Agricultura y Ganadería y Banco de México, S.A., FIRA, *Memoria del Primer Seminario de Ganadería Tropical*, Acapulco, 8 al 12 de marzo de 1976, 5 tomos. El tomo "Desarrollo en general de la ganadería en los trópicos y financiamiento de la producción" es de especial interés.



manufactureras en lugar de pasar parte del día en el ocio o en actividades agropecuarias que eran sólo de beneficio familiar. La nueva tecnología acabó con el trabajo a domicilio, en el cual los capitalistas no podían controlar directamente el proceso de trabajo. Tenía ventajas no tanto por su aportación a la productividad laboral por unidad de trabajo, sino por la facilidad con que podía vigilarse al obrero y sujetarlo a la disciplina fabril, alargando de hecho el día laboral.<sup>16</sup>

En La Chontalpa también se observa un cambio importante en la organización de la producción mediante el uso de nuevas tecnologías, cuyas ventajas no se manifiestan en la productividad por hectárea; más bien contribuye a reorganizar el proceso laboral. Se sujeta a los obreros al control de la banca oficial, en este caso, y a los capitalistas privados en otros, quienes imponen nuevas normas de trabajo. Se establecen metas en cuanto al trabajo físico por persona, basado en un sistema de remuneración a destajo que obliga al jornalero a cumplir o a recibir un sueldo inferior al mínimo que rige en la zona. De esta manera se convierte al agricultor tradicional en proletario, obligándolo a autodisciplinarse. En la medida que no es eficaz, y en La Chontalpa el éxito es poco en lo que refiere a los socios del Plan,<sup>17</sup> la banca simplemente exige la contratación de otros jornaleros, entre los muchos subempleados de la zona, para el pleno cumplimiento de sus programas de cultivo. Así, la baja productividad laboral y la resistencia de los "beneficiarios" del Plan afecta muy poco la rentabilidad de las inversiones productivas.

La nueva organización del proceso productivo también facilita la explotación de superficies mayores. El capitalista puede aprovechar la nueva infraestructura, aumentando sus recursos financieros y reclutando nuevos cuadros de jornaleros del creciente grupo de marginados atraídos a la zona por el programa de inversiones públicas. Una comparación de los rendimientos físicos obtenidos por los socios en sus parcelas individuales, explotadas con tecnología tradicional, y en los terrenos colectivos donde funciona la nueva tecnología, muestra la poca diferencia (a veces son mayores en aquéllas). Así, en La Chontalpa, como en muchas otras partes del campo mexicano, la reorganización del trabajo no parece responder tanto a preocupaciones por la productividad de la tierra cuanto a la posibilidad de expandir el control capitalista a nuevas zonas, con las ventajas que aporta al proceso global de la acumulación de capital. Los capitalistas dirigen la expansión del cultivo y canalizan los beneficios hacia otros sectores donde puedan apropiárselos más fácilmente, sin necesidad de compartirlos con los asalariados (socios del Plan) que están trabajando en sus propios terrenos colectivos.

La nueva tecnología y el proceso productivo alientan

16. Cf. Stephen Marglin, "What do bosses do? The origins and functions of hierarchy in capitalist production", en *Review of Radical Political Economics*, vol. VI, núm. 2, Ann Arbor, Michigan, verano de 1974, pp. 33-60.

17. Mientras que los socios mantengan cierto poder político, siempre tendrán la posibilidad de exigir mayores pagos, en la forma de "utilidades" o de cuotas por el uso de sus terrenos, que les darán cierta libertad en cuanto a la necesidad de someterse al régimen proletario que se está extendiendo en la zona. Ellos constituyen, sin embargo, un grupo excepcional al que seguramente no le será permitido seguir viviendo de sus "rentas" durante mucho tiempo.

también el crecimiento de las agroindustrias. El cultivo en gran escala y el uso de fertilizantes y plaguicidas crean una demanda de los productos controlados por empresas transnacionales. Obviamente, su uso aumenta los costos de producción, algunas veces en forma dramática, reduciendo las ganancias para los ejidatarios. En La Chontalpa el alza en los costos ha llegado a tal grado que un buen número de cultivos ya no es rentable. Así, aun cuando los rendimientos físicos puedan elevarse, la utilidad disponible para los trabajadores no aumenta en términos reales; el nuevo valor adicional producido se destina al pago de los intereses bancarios, los insumos químicos, la maquinaria, etc. Las empresas transnacionales se benefician directamente, o por medio de sus socios nacionales, dada su posición monopolística en los mercados nacional e internacional. Para los ejidatarios, el nuevo estilo tecnológico no sólo es un mecanismo para convertirlos en proletarios, quitándoles la independencia de los campesinos tradicionales, sino también es un sistema de producción que canaliza una gran parte de cualquier aumento en el valor agregado hacia grupos pudientes que pertenecen a otros sectores económicos.

Es importante señalar la diferencia entre este proceso y otro conocido como capitalismo de estado. En efecto, la gran injerencia del Gobierno en la realización del Plan, en la reorganización de los ejidos y en la organización y financiamiento de la producción, permitiría suponer que los beneficios se canalizarían hacia los grupos oficiales y el proyecto reportaría grandes ventajas para los burócratas y técnicos que allí trabajan. Pero éste no es el caso: hasta el momento, el Plan ha creado muchos problemas para todos los grupos oficiales comprometidos con él, ocasionando mucha inestabilidad laboral y grandes pérdidas financieras. Más bien, es conveniente analizar la intervención oficial como un esfuerzo que prepare el terreno para la participación del sector privado en una empresa productiva que reporte ganancias; las acciones gubernamentales se limitarían, en esta concepción, a aquellas actividades que no son rentables o que presentarían problemas de índole política con la gestión privada. En este caso, las actividades en que participa el sector privado incluyen la venta de insumos y maquinaria y la comercialización de la producción, incluyendo tanto el transporte cuanto la venta.<sup>18</sup> El Gobierno se ha preocupado por financiar gran parte de la producción, actividad que no ha dado resultados, y organizarla, incluyendo la restructuración de los ejidos. Con esta perspectiva, es evidente que el Estado, una vez más, absorbe aquella parte de la actividad económica que presenta graves problemas, minimizando el riesgo de la empresa privada, nacional e internacional.

A fin de cuentas, la modernización de la agricultura lleva implícita una contradicción profunda, pues la promesa de mayores ganancias para los productores pequeños, de una mayor participación en la toma de decisiones productivas y de un mejoramiento en los niveles de vida, se enfrentan en la realidad a un nuevo proceso autoritario que impone una tecnología, un proceso de trabajo y una estructura de mercados sobre los cuales el agricultor no puede ejercer control alguno. En el caso de los ejidatarios de La Chontalpa

18. La Nestlé opera siete granjas lecheras en la zona y su presencia ha ocasionado grandes problemas políticos para la empresa y los directivos del Plan, pues ha sido obligada a abandonar cuatro de ellas a pesar de su aparente rentabilidad empresarial.

el resultado ha sido una "modernización" de su vida social y económica, con todos los beneficios y contradicciones que esto implica. En su conjunto, el Plan refleja la tendencia más amplia de la agricultura nacional: su control por grandes capitales y su creciente integración en la división internacional del trabajo.

#### UNA EVALUACION

Para un buen número de analistas nacionales estas tendencias no son causa de preocupación. Ellos consideran que la inserción de México en la economía capitalista internacional, con sus consecuencias positivas y negativas, es saludable para el avance del país. Citan, sobre todo, la contribución en términos de exportaciones, empleo y mayores ingresos que generan las actividades exportadoras. Ven con cierta complacencia el éxito con que México ha podido seguir aumentando sus exportaciones y diversificando el número de productos y mercados, aunque reconocen la importancia del estadounidense y el papel de unos cuantos productos.

Pero detrás de este éxito hay un sinnúmero de problemas a los que estos analistas no dan mucha importancia. El mayor impulso a la ganadería en el sureste para abastecer el mercado interno, requiere el desmonte masivo del trópico húmedo. Las consecuencias de la deforestación son enormes, tanto por la pérdida de la riqueza silvícola como por los cambios en la ecología, en los vientos y en las lluvias. Las modificaciones ocasionadas por el desmonte trascienden los límites regionales y los conocimientos al respecto son todavía muy limitados.

El efecto social de la modernización del agro y su inserción en los mercados internacionales también son motivo de preocupación. Se quita el control del uso de la tierra a los campesinos, convirtiéndolos a la mayor parte de ellos en jornaleros. Pero el avance del Plan no puede garantizarles suficiente empleo, aun en su región de origen, y se les expulsa hacia la ciudad, donde crean "cinturones de miseria" (como también se les llama en La Chontalpa). Algunos pueden obtener mejoras por las oportunidades que se crean, pero la mayoría queda sometida al régimen proletario, con la inseguridad e inestabilidad que acarrea.

Para la economía nacional, la especialización trae consigo una profunda crisis de abastecimiento. La producción comercial destinada a la exportación está sujeta a los altibajos del mercado internacional que ni el país y aparentemente tampoco un grupo de países pobres, pueden controlar. La rentabilidad de las cosechas depende de la oferta de otros países, de ciclos económicos en los países compradores y del control que sobre el mercado pueden ejercer uno o más grupos económicos poderosos en la economía mundial. También implica que el país sea menos capaz, año tras año, de abastecerse con los productos que requiere para su propia alimentación y desarrollo económico. La creciente incapacidad del país para abastecerse a sí mismo provoca otros problemas en la política económica que a veces no se consideran al evaluar las políticas de desarrollo agropecuario.

Finalmente, la nueva tecnología y los insumos modernos que facilitan la transformación de la estructura productiva traen otros problemas. Requieren de fuertes importaciones e

inversiones de capital extranjero que contribuyen a desequilibrar la balanza en cuenta corriente. Fomentan el crecimiento de empresas que van conformando la estructura productiva y aceleran las otras tendencias citadas. Es decir, a medida que se fortalece la agroindustria con fuerte participación extranjera, también se agudizan los problemas de abastecimiento nacional y de control sobre el proceso y la estructura del crecimiento económico nacional.

Es importante señalar, sin embargo, que todo este proceso de mayor penetración del capital internacional en el agro mexicano, así como la transformación en la organización del sector y en el proceso de trabajo, no es producto de una gran conspiración; más bien responde a la expansión inexorable del capitalismo. Esto no quiere decir que el país no pudiera frenarla, o aun luchar para cambiar o limitar sus efectos en el ámbito nacional. En México, los políticos no ven con alarma este proceso; el actual régimen más bien está alentando el proceso mediante la implantación de una política de austeridad y recuperación económica que tiene como base importante la participación activa del capital extranjero.

La Chontalpa es particularmente interesante a este respecto. La mayor parte de su producción no se destina a la exportación y hay relativamente poca participación directa del capital extranjero. A pesar de eso, sin embargo, el Plan refleja cabalmente los esfuerzos del capitalismo internacional para transformar la agricultura: su actual estructura productiva es congruente con un modelo de evolución del sector más adecuado a las necesidades de exportación; sus socios están en proceso de convertirse en proletarios; su organización del trabajo está sujeta al control de los grupos financieros. Aparentemente no es necesario que todos los elementos del aparato productivo sean controlados por el capital extranjero para que le sirvan de apoyo; este caso muestra cómo la transformación del Plan en un "emporio capitalista" plenamente insertado en la economía nacional, permite tanto una coordinación (por intereses particulares) que libera los recursos de otras regiones para la exportación cuanto la explotación comercial por el capital extranjero.

Los actuales dirigentes del Plan tienen gran confianza en que podrán resolver algunos de los problemas técnicos. El éxito económico se logrará mediante la producción de ganado y caña de azúcar y la construcción de nuevas agroindustrias. Para ello tuvieron que destruir la concepción original, pues contradecía el modelo nacional, ya que tenía un carácter cuyos beneficios locales eran demasiado restringidos para las necesidades de acumulación de capital a escala nacional e internacional. El éxito trae consigo problemas sociales al dar origen a la falta de empleo y de ingresos seguros para la mayoría así como al despojo de los campesinos del ejercicio de sus derechos ejidales. Todavía queda por probarse si el Plan producirá los beneficios económicos que se esperan.

En La Chontalpa se ve claramente el avance del capitalismo mundial en México. El Plan fue reorganizado radicalmente para hacerlo congruente con la nueva estrategia agropecuaria nacional. Los ejidatarios de la zona tienen cierta posición privilegiada por el carácter experimental del proyecto, pero a fin de cuentas el Plan es y seguirá siendo un buen ejemplo del efecto social, político y económico de la expansión del capitalismo mundial a nivel local. □